Revisión de la política energética

España 2026

Resumen ejecutivo

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY

The IEA examines the full spectrum of energy issues including oil, gas and coal supply and demand, renewable energy technologies, electricity markets, energy efficiency, access to energy, demand side management and much more. Through its work, the IEA advocates policies that will enhance the reliability, affordability and sustainability of energy in its 32 Member countries, 14 Association countries and beyond.

IEA Member countries:

Australia
Austria
Belgium
Canada
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Japan
Korea
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Mexico
Netherlands
New Zealand
Norway
Poland
Portugal
Slovak Republic
Spain
Sweden
Switzerland
Republic of Türkiye
United Kingdom
United States

The European Commission also participates in the work of the IEA

IEA Accession countries:

Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Israel
Romania

IEA Association countries:

Argentina
China
Egypt
India
Indonesia
Kenya
Morocco
Nigeria
Senegal
Singapore
South Africa
Thailand
Ukraine
Viet Nam

This publication, as well as any data and map included herein, are without prejudice to the status of or sovereignty over any territory, to the delimitation of international frontiers and boundaries and to the name of any territory, city or area.

Source: IEA.
International Energy Agency
Website: www.iea.org

Resumen ejecutivo

España ha avanzado decididamente en la transformación de su sistema energético. Entre 2015 y 2025, ha duplicado con creces la capacidad de generación eléctrica renovable hasta alcanzar alrededor de 119 GW y ha mejorado la intensidad energética en un 2,4 % anual de media. Además, ha reducido las emisiones de gases de efecto invernadero en aproximadamente una quinta parte entre 2015 y 2024. Estos avances reflejan un marco estratégico e institucional ambicioso que se basa en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, y en políticas bien definidas para acelerar la electrificación, la descarbonización y la adaptación al cambio climático. La dimensión social es un rasgo característico de la estrategia energética de España, que se articula, entre otras vías, a través del Instituto para la Transición Justa y medidas diseñadas para vincular la inversión en energía limpia con el empleo, el desarrollo regional y la inclusión social.

La transición energética está ayudando a mejorar la seguridad y la competitividad. Durante 2024, España tuvo que importar casi el 70 % de la energía total consumida, pero la rápida descarbonización del sector eléctrico está reduciendo esta dependencia. La electricidad renovable generada en el país aumentó del 35 % de la generación eléctrica total en 2015 al 56 % en 2025, y el conjunto de todas las fuentes de bajas emisiones representó en torno al 75 %. El aumento de la cuota de energías renovables competitivas a nivel nacional permitió a España reducir su exposición a fluctuaciones bruscas de los precios de los combustibles fósiles y disminuyó sus precios mayoristas de la electricidad. El beneficio en términos de seguridad energética es considerable: sin el aumento de la capacidad renovable instalada entre 2011 y 2024, las importaciones de gas natural en 2024 habrían sido casi un 40 % mayores. Durante el mismo periodo, el crecimiento de la energía eólica y solar evitó unos costes acumulados de importación de gas estimados en 26 000 millones USD.

AIE. CC BY 4.0.

Aunque España progresa en su transición energética, siguen existiendo retos. España ha demostrado su capacidad para desplegar generación limpia a gran escala. Ahora, el reto principal consiste en convertir la transformación del suministro eléctrico en una transición de la economía en su conjunto. Al igual que en muchos países miembros de la AIE, el sector del transporte supone un desafío importante. Las emisiones en este sector aumentaron cerca de un 8 % entre 2015 y 2024. Aunque se avanza en la rehabilitación energética de viviendas, la calefacción basada en combustibles fósiles sigue estando muy extendida en el sector de la edificación. En la industria, la electrificación, el calor renovable y los combustibles de bajas emisiones de carbono ofrecen oportunidades importantes, pero los elevados costes iniciales y la incertidumbre sobre la demanda e infraestructuras futuras frenan la inversión. En los tres sectores de uso final, unos precios de los combustibles fósiles relativamente bajos en comparación con los de la electricidad reducen la rentabilidad del cambio.

Reequilibrar las señales de precios de las distintas fuentes de energía puede impulsar la transformación de la demanda. Acelerar la electrificación de los distintos sectores es una de las prioridades principales para España. El consumo de electricidad, que representó en 2024 el 25 % del consumo de energía final, sigue estando muy por debajo del objetivo nacional del 35 % fijado para 2030. La elevada capacidad de generación renovable en España da lugar a unos precios mayoristas en el mercado *spot* relativamente bajos en comparación con otros países similares, pero los impuestos, los gravámenes y los peajes de red mantienen altos los precios para el consumidor final. Al mismo tiempo, estos componentes del coste son mucho más bajos en el caso de los combustibles fósiles, lo que reduce el incentivo para que los hogares, las empresas y la industria opten por soluciones eléctricas, incluso cuando estas son más limpias y eficientes. Modificar cuidadosamente la carga fiscal y otros gravámenes sobre la electricidad, protegiendo al mismo tiempo a los consumidores más vulnerables, haría más atractiva la electrificación de la demanda, mejoraría la competitividad de la economía y permitiría aprovechar plenamente los beneficios de la generación eléctrica renovable de bajo coste.

A medida que el sistema eléctrico se transforma, la estabilidad de la red eléctrica se está convirtiendo en un reto clave para la política energética. Quienes formulan las políticas públicas deben garantizar que la planificación y la infraestructura de red, así como la operación del sistema se adapten a la evolución de la matriz de generación eléctrica. Acontecimientos recientes, como el apagón de abril de 2025, ponen de relieve la necesidad de reforzar la resiliencia del sistema.

AIE. CC BY 4.0.

España ha puesto en marcha reformas importantes en relación con la operación del sistema eléctrico, incluyendo una mayor supervisión, la actualización de procedimientos de operación y la autorización de inversiones adicionales en tecnologías de red. Mantener la estabilidad de la frecuencia, tensión e inercia de un sistema eléctrico en transformación dependerá de la aplicación rigurosa de estas medidas. También exigirá seguir prestando atención especial a la planificación del sistema y reforzar la gobernanza para adaptarse en todo momento a las circunstancias cambiantes.

El papel creciente de la generación renovable, de carácter variable, hace que la flexibilidad sea crucial para la gestión del sistema eléctrico. El almacenamiento es necesario para aprovechar el exceso de generación y utilizarlo en los periodos de mayor demanda. Una mayor capacidad de interconexión permitiría a España mejorar su propia seguridad en el suministro y, al mismo tiempo, exportar sus excedentes para abastecer a otros mercados europeos. La flexibilidad de la demanda, que incluye la recarga inteligente, la agregación y la gestión de la demanda industrial, puede reducir los costes del sistema y para los consumidores. España ha dado pasos decisivos en esta dirección mediante ayudas económicas, el reconocimiento legal del almacenamiento como recurso de flexibilidad del sistema y la modernización de las normas de funcionamiento de la red, que reflejan mejor la importancia del almacenamiento y de la flexibilidad de la demanda. Esto está dando lugar a un crecimiento de los activos de flexibilidad. Medidas adicionales, como el refuerzo de los incentivos para una tarificación dinámica, podrían acelerar aún más este avance.

Es necesario intensificar los esfuerzos para garantizar una matriz de suministro de energía renovable más equilibrada. Si bien las medidas adoptadas para asegurar la estabilidad y aumentar la flexibilidad del sistema son esenciales para las próximas fases de la transición energética, medidas adicionales en relación con la generación eléctrica también pueden ayudar a superar los retos. La energía solar fotovoltaica representó alrededor del 40 % de la capacidad eléctrica renovable total y supuso más del 90 % del aumento de la capacidad renovable en 2025. El ritmo de este despliegue ha sido impresionante, pero un sistema en el que predomina el aumento de la capacidad solar corre el riesgo de aumentar los vertidos, canibalizar los precios y debilitar las señales para nueva inversión. Una mayor proporción de energía eólica permitiría a España integrar más renovables en su sistema eléctrico, y protegería su viabilidad económica a futuro.

AIE. CC BY 4.0.

La complejidad en la tramitación de autorizaciones y los retos relacionados con la aceptación social podrían ralentizar el desarrollo futuro de las renovables, en especial, de la energía eólica. Hacer frente a estas dificultades mediante el esfuerzo continuo por agilizar los procesos de tramitación de autorizaciones, garantizar que los proyectos de energías renovables compartan sus beneficios con las comunidades locales y aumentar la participación de las partes interesadas será esencial para mantener el crecimiento de la capacidad eléctrica renovable al ritmo necesario para atender el crecimiento esperado de la demanda.

El cierre escalonado de las centrales nucleares previsto entre 2027 y 2035 tendría un impacto importante en la seguridad del suministro energético y en la descarbonización de España. Las centrales nucleares proporcionan electricidad fiable y con bajas emisiones de carbono, y contribuyen al buen funcionamiento del sistema eléctrico. Una gestión adecuada para el cierre escalonado de la generación nuclear de forma segura y asequible exige garantizar que la generación renovable, la flexibilidad del sistema y los recursos de estabilidad se hayan implementado e integrado a tiempo, así como considerar las dinámicas geopolíticas y económicas más amplias y los riesgos asociados. La aprobación de las solicitudes de prórroga de los operadores podría proporcionar una solución transitoria eficiente en costes.

Como en muchos países, la capacidad de implementación es ahora tan importante como la ambición política. Un enfoque de planificación integrado, con revisiones periódicas de los avances vinculadas a medidas correctivas y una mayor cooperación entre ministerios, regiones, autoridades locales, reguladores y operadores, puede ayudar a poner en práctica políticas de transición energética amplias y ambiciosas. Las trabas administrativas, en especial, en la tramitación de permisos y autorizaciones y la evaluación de proyectos, pueden ralentizar la implementación. La escasez de mano de obra cualificada para la instalación de renovables, la integración en la red, la construcción y la eficiencia energética también podría limitar el progreso. Reforzar los recursos administrativos y un esfuerzo importante para fomentar la formación y el reciclaje profesional ayudarían al país a convertir sus objetivos en inversiones, infraestructuras y beneficios para los consumidores.

El enfoque de España centrado en las personas constituye un gran activo. El país ha desarrollado marcos avanzados para llevar a cabo una transición justa y luchar contra la pobreza energética con el respaldo de instituciones especializadas y políticas específicas. Sin embargo, la asequibilidad sigue siendo una gran preocupación para muchos hogares. La transición contará con un mayor apoyo

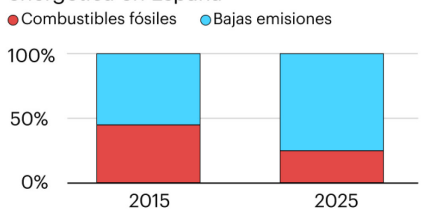
AIE. CC BY 4.0.

público si mejora de forma visible las condiciones de vida, reduce la exposición a la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles y proporciona a los colectivos vulnerables acceso a tecnologías limpias, viviendas eficientes y movilidad asequible. Seguir centrándose en la renovación selectiva de edificios, el apoyo a la eficiencia energética y programas inclusivos de tecnologías de energía limpia puede proporcionar beneficios sociales duraderos.

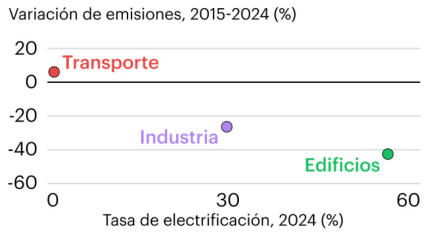
En general, este informe concluye que España afronta los próximos años desde una posición de fortaleza estratégica. Ha construido uno de los parques de energía renovable más grandes de los países miembros de la AIE, ha creado un marco de políticas públicas sólido y ha demostrado que sus esfuerzos de descarbonización favorecen la seguridad, la competitividad y la inclusión social. La prioridad ahora debería ser convertir estos cimientos en un sistema energético plenamente integrado, flexible y resiliente. Si España logra acelerar la electrificación, modernizar las redes, potenciar la flexibilidad, gestionar con prudencia el cierre escalonado de las centrales nucleares y mantener la confianza de la ciudadanía y las empresas, podrá pasar de estar a la vanguardia en la descarbonización del sector eléctrico a convertirse en un modelo para la transición energética de toda la economía.

AIE. CC BY 4.0.

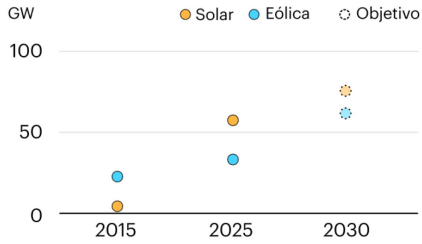
La rápida **descarbonización del sector eléctrico** está impulsando la transición energética y fortaleciendo la seguridad energética en España



La reducción de emisiones y las tasas de electrificación **varían entre los sectores de uso final**



El gran crecimiento de la **capacidad solar** instalada dio lugar a importantes avances en asequibilidad y descarbonización



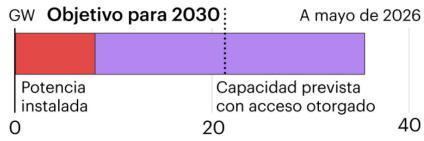
El despliegue de la energía eólica debe acelerarse para lograr una matriz de generación de energía renovable más equilibrada y eficiente

25 a 35%

España tiene objetivos ambiciosos para aumentar su **tasa de electrificación** en 10 puntos porcentuales entre 2024 y 2030

22.5 GW en 2030

Alcanzar el **objetivo de España sobre almacenamiento** facilitaría la integración de energías renovables variables en el sistema eléctrico



Extender la transformación del suministro eléctrico a una transición del conjunto de la economía puede permitir que **España aproveche el potencial de una electrificación descarbonizada**



Las notas y fuentes de esta infografía se pueden consultar en la última página (pág. 25).

AIE. CC BY 4.0.

Recomendaciones de políticas para España

Panorama de la política energética

1. Reforzar la supervisión y la coordinación de la implementación para garantizar el cumplimiento oportuno e integral en toda la economía de los objetivos y compromisos para la transición energética
2. Electrificar la demanda energética industrial y residencial en consonancia con la rápida expansión de la generación, mediante reducciones de la fiscalidad sobre la electricidad que mejoren la competitividad y la asequibilidad
3. Acelerar la transición en el sector del transporte al abordar las barreras que suponen los costes, mejorar el desarrollo de infraestructuras y reforzar la confianza de los consumidores
4. Fomentar la renovación de edificios para alcanzar los objetivos de eficiencia energética y electrificación, a la vez que se implementan ayudas específicas para los consumidores vulnerables
5. Reforzar la planificación de las necesidades de personal y las estrategias de formación con el fin de apoyar la transición energética en todos los sectores y garantizar, al mismo tiempo, suficiente personal administrativo para tramitar los permisos y cumplir otros requisitos regulatorios en los plazos previstos

Seguridad energética y diversificación del suministro — Área prioritaria

6. Desarrollar una planificación integrada de la infraestructura que aborde de forma conjunta las necesidades actuales y futuras de los sistemas eléctrico y gasista, el hidrógeno y otros gases renovables
7. Considerar la posibilidad de aprobar la extensión de la vida útil de los reactores nucleares existentes tras las correspondientes revisiones de seguridad, teniendo en cuenta su importancia para la seguridad del suministro, así como los costes y beneficios de su funcionamiento a largo plazo

Electrificación resiliente del sistema energético — Área prioritaria

8. Reequilibrar la cartera de renovables mediante un mayor despliegue de tecnologías eólicas, híbridas y de almacenamiento para aumentar su valor para el sistema, abordando al mismo tiempo los retos relacionados con la tramitación de permisos y la aceptación social
9. Aumentar la flexibilidad del sistema eléctrico mediante un despliegue acelerado del almacenamiento, una mejor respuesta a la demanda e interconexiones.
10. Reforzar la seguridad y la resiliencia de la red mediante el fortalecimiento de la gobernanza entre los agentes del sistema eléctrico, la implantación de procedimientos de operación mejorados y la adaptación de los marcos regulatorios a las necesidades cambiantes del sistema

AIE. CC BY 4.0.

Recomendaciones

1 Reforzar la supervisión y la coordinación de la implementación para garantizar el cumplimiento oportuno e integral en toda la economía de los objetivos y compromisos para la transición energética

España ha establecido un marco estratégico sólido y ambicioso para su transición energética, basado en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y en el PNIEC, y reforzado por la legislación reciente, en particular, el Real Decreto-ley 7/2026. Estos instrumentos establecen objetivos claros para la descarbonización, la electrificación, la seguridad energética, la asequibilidad y la resiliencia. El reto principal en la actualidad es lograr una implementación coherente en toda la economía. Los resultados dependerán de una ejecución oportuna, una coordinación eficaz y un seguimiento continuo en todos los sectores y niveles de gobierno. Dicha coordinación será esencial para mantener la confianza de los inversores, en particular, dada la magnitud de la movilización de capital privado prevista en el PNIEC; para mantener el respaldo social a la transición energética, sobre todo, cuando se requiera el desarrollo de infraestructuras y cambios de comportamiento, y para preservar la credibilidad de las políticas públicas tanto a nivel nacional como internacional.

Los principales factores que impulsan la transición, como la electrificación, la renovación de edificios, la adaptación y la formación, requieren una acción coordinada entre ministerios, organismos reguladores, comunidades autónomas, autoridades locales y actores privados. Por lo tanto, los resultados podrían verse afectados por problemas de gobernanza y coordinación.

Para fomentar la ejecución en toda la economía, España podría reforzar la supervisión de la implementación del PNIEC y de otros planes relacionados con la transición energética. Para ello, sería necesario establecer revisiones periódicas y estructuradas de los avances, orientadas de forma específica en los resultados y respaldadas por evaluaciones independientes y mecanismos de corrección predefinidos. De acuerdo con las obligaciones de elaboración de informes existentes a nivel nacional y de la UE, dichas revisiones ayudarían a identificar de manera temprana las deficiencias en la implementación, a distinguir los problemas estructurales de los retrasos temporales y a facilitar un ajuste oportuno cuando los

AIE. CC BY 4.0.

resultados difieran de la planificación acordada. España podría tomar como referencia para estas revisiones al Comité de Cambio Climático del Reino Unido, un organismo de control independiente y de carácter legal que supervisa el cumplimiento de los objetivos climáticos y energéticos, informa con regularidad al Parlamento y proporciona las respuestas oficiales del Gobierno («cumplir o dar explicaciones»). También podría seguir el ejemplo de Países Bajos, donde las evaluaciones independientes de la implementación de las políticas climáticas y energéticas realizadas por la Agencia de Evaluación Medioambiental de los Países Bajos se incorporan sistemáticamente a la toma de decisiones del Gobierno, lo que permite reforzar de forma oportuna las políticas mediante paquetes de medidas adicionales (paquetes de medidas climáticas) siempre que los resultados se puedan ver comprometidos.

Además, España debería considerar seguir reforzando la coordinación estructurada entre los distintos niveles de gobierno y aumentar la rendición de cuentas de las autoridades regionales respecto a las competencias y responsabilidades que estos organismos ya tienen. Esto reviste especial importancia dado el papel clave que desempeñan las comunidades autónomas en la tramitación de autorizaciones, el despliegue de infraestructuras, la renovación de edificios y la oferta de formación. Una coordinación más estructurada reduciría las trabas en la implementación, mejoraría la rendición de cuentas y garantizaría que las prioridades nacionales se llevaran a cabo de forma efectiva en todo el territorio. España podría inspirarse en el modelo de Dinamarca, cuya experiencia, aunque a una escala mucho menor, pone de relieve las ventajas de asignar con claridad las responsabilidades a las autoridades subnacionales. Esto ha contribuido a que los objetivos nacionales de Dinamarca se pongan en práctica de forma coherente por todo su territorio, en especial, en sectores que dependen de las infraestructuras, como la calefacción y la construcción.

2 Electrificar la demanda energética industrial y residencial en consonancia con la rápida expansión de la generación, mediante reducciones de la fiscalidad sobre la electricidad que mejoren la competitividad y la asequibilidad

Un crecimiento más rápido de la demanda de electricidad puede aprovechar el potencial de la rápida expansión de la generación eléctrica renovable en España, en particular, al aumentar la utilización de las renovables y reducir las restricciones, lo

AIE. CC BY 4.0.

que incrementaría la estabilidad de la red y disminuiría los costes totales del sistema energético. La electrificación de la industria ofrece una oportunidad de especial relevancia, ya que puede aportar una demanda flexible capaz de adaptarse a las necesidades del sistema eléctrico. Sin embargo, la aceleración de la electrificación en toda la economía dependerá, en última instancia, de la asequibilidad de la electricidad.

Por lo tanto, con el fin de incentivar la electrificación, España debería tratar de reducir los impuestos sobre la electricidad y eliminar los gravámenes no relacionados con el suministro de energía de la factura eléctrica. En este contexto, debería considerar la posibilidad de convertir en permanentes determinadas medidas temporales previstas en el Real Decreto-ley 7/2026, incluida la reducción del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), del 7 %, tal y como tiene previsto el Gobierno español (reducción parcial en 2027 y total en 2028), y del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE), del 5,113 %. Además, reequilibrar la carga fiscal entre los distintos vectores energéticos reforzaría los incentivos para sustituir combustibles fósiles por electricidad al reflejar mejor las prioridades de descarbonización y los costes subyacentes del sistema. Dichas reformas deberían ir acompañadas de evaluaciones exhaustivas de sus posibles repercusiones en la asequibilidad, la competitividad industrial y las finanzas públicas, y podrían requerir una implantación gradual para garantizar la previsibilidad, limitar los efectos distributivos negativos y mantener el respaldo social y político. Numerosos países que se encuentran en una situación similar ya han puesto en marcha reformas de este tipo. Por ejemplo, Finlandia redujo de forma gradual el impuesto sobre la electricidad para determinados grupos de usuarios industriales hasta el tipo mínimo de la UE, de 0,5 EUR/MWh, como parte de su reforma fiscal energética, a la vez que aumentó la carga fiscal sobre los combustibles fósiles.

España debería seguir priorizando la tramitación de los refuerzos de la red, que permiten la electrificación de la industria y la conexión de nuevas cargas. No obstante, dado que la capacidad disponible no suele ser el problema (el 35 % de los nudos de la red de transporte disponía de capacidad de acceso firme en octubre de 2026), resulta especialmente importante acelerar la ejecución de los proyectos autorizados y mejorar los procedimientos de acceso y conexión. Esto debería complementarse con un mayor aprovechamiento de los mapas de capacidad introducidos en 2026, ajustándolos según sea necesario, y garantizando que sean transparentes, se actualicen periódicamente y resulten fáciles de utilizar para orientar las decisiones de inversión. Las reformas que se están llevando a cabo para introducir modalidades de acceso flexible constituyen un avance prometedor y

AIE. CC BY 4.0.

también podrían ampliarse. Al mismo tiempo, el país podría aprovechar en mayor medida los mecanismos de asignación, como los concursos de capacidad de acceso y los criterios de priorización establecidos en el Real Decreto-ley 7/2026, con el fin de garantizar que, en los casos en que exista escasez, la capacidad de red se destine a los proyectos que aporten el mayor valor social.

3 Acelerar la transición en el sector del transporte al abordar las barreras que suponen los costes, mejorar el desarrollo de infraestructuras y reforzar la confianza de los consumidores

La transición en el sector del transporte sigue siendo limitada y existe el riesgo de que su adopción se concentre en las grandes ciudades y en los hogares con mayores ingresos. Para acelerar los avances será necesario reforzar el enfoque integral de España en materia de movilidad sostenible, combinando la reducción de la demanda, señales de precios más claras, un desarrollo coordinado de infraestructuras y medidas específicas para los sectores más rezagados.

Seguir mejorando mediante el aumento de las inversiones en la accesibilidad del transporte público y el fomento de su uso es eficaz y eficiente. España debería redoblar los esfuerzos para impulsar un cambio modal, en particular, del uso del coche privado y los vuelos nacionales hacia el tren y otros medios de transporte colectivo. La inversión continua en servicios ferroviarios de alta calidad, con precios competitivos y una oferta horaria adecuada, incluso en trayectos de corta y media distancia, puede reducir la demanda de petróleo, aliviar la presión sobre la infraestructura vial y mejorar la conectividad. Además de reforzar los servicios ferroviarios, España podría impulsar su iniciativa legislativa para restringir los vuelos nacionales cortos cuando existan alternativas competitivas en tren. Para ello, podría seguir el ejemplo de Francia, que prohíbe las rutas aéreas nacionales con alternativas directas en tren de menos de 2,5 horas.

Según el borrador del Marco de Acción Nacional para consolidar una red integral de recarga eléctrica y combustibles alternativos en el transporte, el país ha registrado un sólido avance en electromovilidad, con una rápida expansión de los puntos de recarga de acceso público y de la adopción del vehículo eléctrico. No obstante, sigue siendo importante garantizar la eficacia de los programas de ayudas al vehículo eléctrico. Aunque España ha introducido importantes incentivos económicos, su impacto dependerá de una comunicación clara, de la accesibilidad y de su aplicación

AIE. CC BY 4.0.

oportuna. Reforzar las señales de precios contribuiría a impulsar aún más su adopción. Esto podría incluir el aumento de la diferencia fiscal entre los vehículos con motor de combustión interna y los vehículos eléctricos, especialmente en el caso de las flotas de vehículos de empresa. A la hora de elaborar su plan nacional de despliegue de la infraestructura de recarga, España podría seguir el ejemplo de iniciativas ya existentes, como la Agenda Nacional de Infraestructura de Carga de los Países Bajos. El plan debería tener como objetivo mejorar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y las partes interesadas, y proporcionar un marco claro para la recarga en corredores, el despliegue urbano y rural, la planificación de la conexión a la red y la interoperabilidad, a la vez que contribuye a subsanar las deficiencias que aún existen en materia de cobertura y fiabilidad.

Es necesario prestar especial atención a los sectores donde la electrificación aún está poco desarrollada, en particular, el transporte pesado y la recarga en el lugar de trabajo. Para descarbonizar el transporte por carretera más allá de los turismos, se requerirán medidas específicas para autobuses, vehículos de mercancías y flotas comerciales, incluidas infraestructuras y ayudas adaptadas. Impulsar la recarga en el lugar de trabajo puede facilitar aún más el acceso, en particular, a quienes no disponen de opciones de recarga en casa, a la vez que fomenta patrones de recarga que se ajustan mejor a los periodos de mayor generación de energía renovable.

Otras iniciativas y programas innovadores podrían ampliar aún más las opciones de descarbonización del transporte para determinados tipos de usuarios. España puede aprovechar las medidas incluidas en el borrador de su Plan Social para el Clima con el fin de fomentar la adopción del vehículo eléctrico entre los colectivos vulnerables mediante ayudas específicas para que autónomos y microempresas puedan adquirir vehículos eléctricos ligeros, así como para la electrificación y renovación de las flotas comerciales y de vehículos pesados.

4 Fomentar la renovación de edificios para alcanzar los objetivos de eficiencia energética y electrificación, a la vez que se implementan ayudas específicas para los consumidores vulnerables

A medida que los edificios se renueven, las políticas públicas deberían favorecer en mayor medida la instalación de bombas de calor u otras soluciones de bajas

AIE. CC BY 4.0.

emisiones. Esto contribuiría a desincentivar la inversión en sistemas basados en combustibles fósiles que entrañan el riesgo de dependencia a largo plazo. Algunas de estas medidas ya se han incluido en el Real Decreto-ley 7/2026. Las señales claras y con visión de futuro mejoran la seguridad de la inversión para hogares, instaladores y fabricantes. Además, facilitan la descarbonización de los edificios de viviendas plurifamiliares, evitan la dependencia de los combustibles fósiles y contribuyen a que las decisiones en materia de construcción se ajusten a los objetivos de España de lograr un parque inmobiliario libre de emisiones para 2050. Los instrumentos de financiación existentes ya ofrecen la base para este enfoque, pero podrían aprovecharse aún más para apoyar la electrificación a gran escala. Además de reequilibrar la fiscalidad, tal y como se expone en la Recomendación 2, el Gobierno podría plantearse endurecer las restricciones relativas a la instalación de calderas de gas y de productos petrolíferos en edificios nuevos y renovados, teniendo en cuenta al mismo tiempo el impacto sobre la asequibilidad y ofreciendo ayudas específicas cuando sea necesario. El desarrollo actual de las políticas públicas de Irlanda en este ámbito podría servir como una valiosa referencia.

Al mismo tiempo, garantizar que los beneficios de las renovaciones de edificios sean socialmente inclusivos debe seguir siendo una prioridad. España debe mantener el apoyo a los hogares vulnerables, en particular, mediante la puesta en marcha del próximo Plan Social para el Clima y el acceso al Fondo Social para el Clima de la UE. Los programas de renovación específicos para hogares con bajos ingresos y vulnerables energéticamente, combinados con procedimientos administrativos simplificados y un apoyo adaptado a sus necesidades, pueden lograr reducciones duraderas tanto en la demanda energética como en las facturas de energía y, a la vez, mejorar el bienestar. Estas medidas complementarían los mecanismos existentes de protección de los consumidores y reducirían la exposición de los hogares a la volatilidad de los precios de la energía a largo plazo. Reforzar aún más el papel de las ventanillas únicas contribuiría a informar a la ciudadanía sobre las opciones disponibles, facilitar el acceso a los incentivos financieros y ayudarles en todos los aspectos administrativos y prácticos relacionados con el proceso de renovación.

Por último, España podría reforzar su sistema nacional de ahorro energético con el fin de impulsar mejor el aumento de la eficiencia a largo plazo en la renovación de viviendas. Aunque los Certificados de Ahorro Energético (CAE) se han convertido en una importante herramienta para las políticas públicas, tienden a favorecer medidas con efectos inmediatos, lo que los hace más adecuados para la industria que para las viviendas. Los hogares se enfrentan a barreras persistentes, como los elevados

AIE. CC BY 4.0.

costes iniciales y los largos plazos de amortización, sobre todo en el caso de renovaciones de mayor envergadura. Además del sistema CAE, las ayudas específicas para grandes renovaciones, junto con una mayor capacidad de ejecución del Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE), podrían acelerar los proyectos residenciales integrales, especialmente en edificios plurifamiliares. Estas medidas deberían ir acompañadas de una supervisión y una evaluación rigurosas. España debería así mismo evaluar en detalle el impacto del ajuste introducido en el sistema CAE en respuesta a la crisis mediante el Real Decreto-ley 7/2026 y seguir fomentando la sustitución de las calderas de combustibles fósiles por bombas de calor mediante instrumentos de ayuda específica adecuados.

5 Reforzar la planificación de las necesidades de personal y las estrategias de formación con el fin de apoyar la transición energética en todos los sectores y garantizar, al mismo tiempo, suficiente personal administrativo para tramitar los permisos y cumplir otros requisitos regulatorios en los plazos previstos

La transición energética supone también una transición para los trabajadores, las empresas y las instituciones. Aunque genera oportunidades de empleo, la escasez de mano de obra cualificada y las limitaciones de capacidad administrativa pueden dificultar que España alcance sus objetivos energéticos y climáticos de forma oportuna y rentable. El país ya ha dado pasos importantes para hacer frente a estos retos, pero el ritmo, la magnitud y el carácter intersectorial de la transición energética exigen ahora un enfoque más integrado, con visión de futuro y basado en datos para planificar la mano de obra tanto en el sector público como en el privado.

España debería considerar reforzar el seguimiento, basado en datos, de las competencias pertinentes para la transición energética, con el fin de fundamentar de forma sistemática el diseño y la aplicación de las políticas públicas. Esto debería basarse en información actualizada sobre el mercado laboral, el análisis de las necesidades actuales y previstas en todos los sectores y regiones, y la vinculación explícita de la planificación de la mano de obra con los objetivos y plazos establecidos en el PNIEC, el Plan Nacional de Renovación de Edificios, el Plan Social para el Clima y los marcos de planificación del sistema eléctrico. Una coordinación aún más estrecha entre las autoridades regionales y las autoridades competentes en materia

AIE. CC BY 4.0.

de energía, empleo y educación contribuiría a garantizar que las políticas formativas respondan de forma dinámica a las necesidades cambiantes y a reducir los desajustes entre la formación proporcionada y las necesidades derivadas de las carteras de proyectos.

En paralelo, España debería seguir ampliando y adaptando los programas de mejora de las competencias y de reciclaje profesional, con especial atención a los sectores en los que aumentan los riesgos para la ejecución, en particular la construcción, el transporte, la electrificación y la eficiencia energética. Acelerar la renovación y la electrificación requerirá un aumento rápido del número de personal cualificado en instalación, electricidad, auditoría energética, construcción y dirección de obra, mientras que la expansión y la digitalización de la red eléctrica exigirán perfiles técnicos más especializados. La experiencia de España con el abandono gradual del carbón y las políticas de transición justa proporciona una base sólida para esta labor y pone de relieve la importancia de una planificación proactiva de la mano de obra, un enfoque territorial y una implicación continua de las partes interesadas. Llevar estas experiencias más allá de las regiones mineras y aplicarlas a otros sectores afectados por la descarbonización ayudará a anticipar las disrupciones en el mercado laboral, apoyar la movilidad y el reciclaje profesional y promover una transición justa e inclusiva.

Por último, el Gobierno debería abordar las limitaciones de recursos humanos en el sector público, ya que podrían convertirse en un factor limitante para la transición energética. El Gobierno desempeña un papel esencial en la gestión y el impulso de la transición, en especial, a través de la tramitación de autorizaciones, las evaluaciones ambientales, los permisos de conexión a la red y la supervisión regulatoria. Se prevé que este papel cobre aún más importancia debido a los cambios legislativos en la tramitación de autorizaciones y las solicitudes de conexión a la red, que exigen una evaluación más detallada de los proyectos y un seguimiento más exhaustivo de los procesos de desarrollo. Garantizar una dotación de personal adecuada en el sector público, junto con una formación específica para las autoridades reguladoras y responsables de la tramitación de autorizaciones, contribuiría a reducir las trabas, mejorar la previsibilidad para inversores y promotores de proyectos y favorecería el cumplimiento oportuno de los objetivos energéticos y climáticos del país.

AIE. CC BY 4.0.

6 Desarrollar una planificación integrada de la infraestructura que aborde de forma conjunta las necesidades actuales y futuras de los sistemas eléctrico y gasista, el hidrógeno y otros gases renovables

La electrificación de la demanda y el cambio estructural que supone la progresiva reducción de los combustibles fósiles, incluido el gas natural, son dos factores importantes de la transición energética española. El PNIEC de España prevé un aumento significativo de la demanda eléctrica en los próximos años, hasta alcanzar alrededor del 35 % del consumo total de energía final en 2030. A medida que avance la electrificación de los edificios, el transporte y la industria, y se reduzca el consumo total de energía gracias a las mejoras de eficiencia, se espera una disminución de la demanda de gas natural. Ambas tendencias no son independientes, sino más bien dos aspectos de un mismo proceso de transformación del sistema energético. A esto se suma la creciente importancia de los gases de bajas emisiones, ya que el despliegue del hidrógeno y otros gases renovables requiere de decisiones coordinadas sobre la infraestructura de transporte, los puntos de conexión, el almacenamiento y los usos finales.

En la actualidad, estas dinámicas interrelacionadas no se reflejan lo suficiente en los marcos institucionales. Aunque instrumentos estratégicos como el PNIEC ofrecen una visión integrada, esto no se traslada de forma sistemática a la planificación conjunta de las infraestructuras, a las decisiones operativas ni a los marcos de inversión. La planificación de los sistemas eléctricos y gasistas sigue desarrollándose en gran medida de forma independiente, dirigida por operadores distintos y regida por marcos regulatorios diferentes. Como consecuencia, los reguladores y operadores del sistema corren el riesgo de tomar decisiones basadas en hipótesis que no estén totalmente alineadas. Esto puede dar lugar a inversiones poco eficientes, activos varados y riesgos para la seguridad del suministro.

España debería avanzar hacia una planificación más coordinada de las infraestructuras energéticas, que involucre de forma activa al regulador, a los operadores de los sistemas y a las principales partes interesadas de los sectores de la electricidad, el gas, el hidrógeno y otros gases renovables. Dado que el Gobierno español está creando la estructura necesaria para lograr una planificación integrada, debería garantizar que este enfoque se refleje adecuadamente en el marco regulatorio, para facilitar una coordinación efectiva entre los distintos sectores

AIE. CC BY 4.0.

energéticos. El Gobierno debería considerar la posibilidad de establecer un marco formal para la planificación conjunta y la coordinación entre los operadores de los sistemas eléctrico y gasista (REE y Enagás), basado en escenarios compartidos a largo plazo y en mecanismos estructurados de coordinación que permitan alinear el desarrollo de las redes, las necesidades de flexibilidad y las decisiones de inversión en los sectores de la electricidad, el gas y los vectores energéticos emergentes. Asimismo, será de especial importancia clarificar las responsabilidades operativas y financieras a largo plazo, así como las relativas al desmantelamiento de infraestructuras, a medida que disminuya la demanda de gas natural.

Unas directrices claras permitirán adaptar la infraestructura gasista a las necesidades cambiantes del sistema, con una asignación transparente de los costes y una pronta definición de las vías de reconversión o retirada de activos. En general, un enfoque de planificación más integrado y coordinado mejoraría la previsibilidad, reduciría los riesgos de la transición y favorecería una evolución rentable del sistema energético, garantizando la seguridad energética tanto a corto como a largo plazo.

7 Considerar la posibilidad de aprobar la extensión de la vida útil de los reactores nucleares existentes tras las correspondientes revisiones de seguridad, teniendo en cuenta su importancia para la seguridad del suministro, así como los costes y beneficios de su funcionamiento a largo plazo

La energía nuclear es una fuente de electricidad de bajas emisiones que proporciona capacidad firme y estable, y contribuye a la seguridad del suministro al reducir la dependencia de las importaciones de gas natural. Aunque no suele ser adecuada para el control dinámico de tensión, la energía nuclear contribuye a la estabilidad del sistema como fuente de generación síncrona, favoreciendo el funcionamiento seguro y fiable de la red eléctrica.

En 2025, el Congreso de los Diputados aprobó una moción para que el Gobierno reconsiderara el calendario de cierre de las centrales nucleares. Por esas mismas fechas, el operador de la central nuclear de Almaraz solicitó formalmente una prórroga de tres años para su operación, hasta 2030. En agosto de 2026, el Gobierno aprobó esta prórroga, alegando incertidumbre en los mercados energéticos

AIE. CC BY 4.0.

internacionales y la necesidad de mitigar la exposición de los consumidores a la volatilidad de los precios. España debería partir de este precedente y seguir desarrollando un marco transparente de evaluación que sirva de base para adoptar decisiones de aprobación caso por caso. Estas decisiones deberían fundamentarse en criterios relativos a la seguridad (garantizada por el organismo regulador), la adecuación desde el punto de vista de la seguridad energética, y los costes y beneficios tanto para los consumidores como para el sistema eléctrico. Los impuestos y gravámenes asociados a la energía nuclear deberían garantizar que el marco económico reconozca tanto la contribución de la energía nuclear al sistema energético como los costes asociados a sus externalidades, como la gestión de residuos y los costes de desmantelamiento.

Por último, el Gobierno debería establecer una perspectiva de planificación a largo plazo de las necesidades de personal que refleje sus decisiones sobre las prórrogas de operación y el eventual cierre de las centrales nucleares. De este modo, se contribuiría a preservar la mano de obra cualificada y la gestión del conocimiento en toda la cadena de suministro nuclear, y se ayudaría a garantizar que las competencias relacionadas con la energía nuclear se reorientaran de manera efectiva hacia otras partes del sistema energético y de la economía en su conjunto.

8 Reequilibrar la cartera de renovables mediante un mayor despliegue de tecnologías eólicas, híbridas y de almacenamiento para aumentar su valor para el sistema, abordando al mismo tiempo los retos relacionados con la tramitación de permisos y la aceptación social

Al reforzar el papel de la generación nacional de bajo coste, la rápida expansión de la energía solar fotovoltaica ha aportado importantes beneficios para la seguridad del suministro eléctrico, la asequibilidad y la descarbonización en España. Sin embargo, también ha dado lugar a una cartera de renovables estructuralmente desequilibrada y cada vez más expuesta a la caída de los precios de captura, característica de los sistemas con una elevada penetración de energía solar. Si no se abordan estas tendencias, podrían debilitar la viabilidad económica de los proyectos, ralentizar la incorporación de nueva capacidad más allá del corto plazo y ejercer una presión adicional sobre el objetivo de España de alcanzar un 81 % de generación eléctrica renovable en 2030.

AIE. CC BY 4.0.

España necesita reorientar sus políticas públicas hacia un marco más diversificado y orientado al sistema. Debería darse mayor prioridad a las tecnologías eólicas, híbridas y de almacenamiento, junto con medidas para aumentar la electrificación. Esto debería reflejarse en los próximos concursos de capacidad de acceso a la red eléctrica, en el diseño de futuras subastas eléctricas y en acuerdos de mercado más amplios. Unos mecanismos de apoyo bien diseñados podrían contribuir a orientar la inversión hacia los proyectos que aporten mayores beneficios al sistema. En este contexto, y teniendo en cuenta el aumento previsto de la demanda, España podría introducir una subasta competitiva específica para adjudicar contratos por diferencia a proyectos híbridos que combinen energía eólica, solar y de almacenamiento. Esto mejoraría la financiabilidad de los proyectos y su valor para el sistema.

Las medidas adoptadas en 2025 y 2026 para acelerar la tramitación de autorizaciones y permisos, apoyar la repotenciación, promover la flexibilidad y eliminar las barreras para las instalaciones que combinan generación renovable y almacenamiento suponen un avance en la dirección adecuada. Ahora, la prioridad es garantizar que estas reformas se traduzcan en una ejecución más rápida de los proyectos, en procedimientos de acceso a la red más claros y en una mayor coordinación entre las autoridades competentes en materia de autorizaciones y permisos. Esto será especialmente importante para los proyectos eólicos, de almacenamiento e híbridos, que suelen afrontar plazos de desarrollo más largos, requisitos de autorización más complejos y mayores retos de aceptación social que los proyectos de energía solar fotovoltaica.

España debería seguir implementando todas las ambiciosas medidas recogidas en el Real Decreto-ley 7/2026. Entre ellas se incluyen la designación y el desarrollo activo de las Zonas de Aceleración Renovable, la plataforma digital para la tramitación de autorizaciones que mejore la coordinación entre autoridades, la agilización de los plazos judiciales y administrativos, y la promoción de medidas concretas para facilitar la repotenciación eólica y los proyectos híbridos, incluida la hibridación de proyectos con almacenamiento en baterías. Estos esfuerzos deberían sustentarse en la plena aplicación de la Directiva Europea de Energías Renovables (DER III), incluido el principio de que los proyectos de energías renovables puedan considerarse de interés público superior. Asimismo, unos mecanismos más sólidos de reparto de beneficios a nivel local y de participación de las comunidades en la propiedad de los proyectos contribuirían a reforzar la aceptación pública y a asegurar la licencia social necesaria para la próxima fase de inversión en renovables y flexibilidad.

AIE. CC BY 4.0.

9 Aumentar la flexibilidad del sistema eléctrico mediante un despliegue acelerado del almacenamiento, una mejor respuesta a la demanda e interconexiones

España debería seguir incentivando el despliegue de instalaciones de almacenamiento que aporten valor al sistema, incluidas las baterías a escala de red, y los proyectos renovables híbridos o con almacenamiento co-ubicado, con el fin de reducir la congestión, aumentar el valor para el sistema de la generación renovable y reforzar la seguridad del suministro eléctrico. Para ello, es necesario aplicar plena y eficazmente las medidas adoptadas recientemente en materia de política energética, incluido el marco de flexibilidad y las reformas de acceso a la red introducidas mediante el Real Decreto-ley 7/2026.

España podría aprovechar la experiencia internacional de otros países que afrontan necesidades similares de flexibilidad del sistema. Un ejemplo es Australia, donde los sistemas de almacenamiento de energía mediante baterías, especialmente las que tienen capacidad de formación de red, se han expandido rápidamente gracias a incentivos públicos específicos y a la contratación de servicios del sistema. España también debería garantizar que los recursos de almacenamiento se reconozcan y remuneren plenamente a través de su mercado de capacidad, tal y como contempla la propuesta del Gobierno. Esto reflejaría su contribución a la adecuación, la fiabilidad y la capacidad máxima del sistema, y proporcionaría señales de inversión a largo plazo.

España también podría aprovechar su sólido marco de autoconsumo tomando como referencia el programa australiano *Cheaper Home Batteries* (baterías domésticas más baratas). Este enfoque sería coherente con los esfuerzos en curso del país para modernizar su marco de autoconsumo, incluidas las recientes propuestas regulatorias destinadas a facilitar la integración del almacenamiento distribuido mediante baterías. Un régimen de apoyo claro, de ámbito nacional y de fácil acceso para las baterías residenciales que ofrezca incentivos previsibles y por adelantado ayudaría a movilizar la flexibilidad de los hogares y complementaría las inversiones en almacenamiento a gran escala. Esto reforzaría la resiliencia del sistema y mejoraría la gestión de la demanda punta, a la vez que aumentaría la participación de los consumidores en la transición energética.

AIE. CC BY 4.0.

Para movilizar la respuesta de la demanda en los sectores de la industria, los edificios y el transporte, España debería mejorar el diseño de las tarifas de red, garantizando que los cargos de red reflejen mejor las condiciones del sistema. También debería mejorar los mecanismos de tarificación dinámica, reforzar el papel de los agregadores independientes y adaptar los marcos regulatorios para facilitar la participación de los distintos sectores, a la vez que reduce las trabas administrativas. Otros países con una elevada participación de energías renovables variables en su matriz eléctrica han hecho grandes avances en este sentido. Por ejemplo, en Noruega, las tarifas minoristas reflejan la evolución horaria del mercado y, de este modo, se aprovecha el potencial de flexibilidad de la respuesta de la demanda.

Las interconexiones, además de aumentar la resiliencia, pueden desempeñar un papel importante a la hora de respaldar el funcionamiento flexible del sistema eléctrico. España debería continuar trabajando para reforzar las interconexiones existentes y desarrollar nuevos proyectos cuando sea viable desde el punto de vista económico, profundizando en la integración regional para contribuir al balance del sistema, la seguridad del suministro y una descarbonización rentable. Se debe prestar especial atención a los proyectos de interconexión más desarrollados y viables a corto plazo, así como a los que se encuentran actualmente en proceso de construcción. La madurez y la capacidad de ejecución deberían ser los criterios determinantes.

10 Reforzar la seguridad y la resiliencia de la red mediante el fortalecimiento de la gobernanza entre los agentes del sistema eléctrico, la implantación de procedimientos de operación mejorados y la adaptación de los marcos regulatorios a las necesidades cambiantes del sistema

España debería seguir reforzando la gobernanza, la supervisión y el cumplimiento regulatorio entre todos los agentes del sistema eléctrico, incluidos los operadores de las redes de transmisión y distribución, los productores y otros participantes del mercado. Esto debería incluir la aplicación y el cumplimiento coherentes de los códigos de red, una mayor responsabilidad del operador del sistema en la estabilidad de la red y mecanismos de coordinación mejorados, tanto en condiciones normales de operación como en situaciones de emergencia. Las autoridades reguladoras

AIE. CC BY 4.0.

deberían seguir reforzando sus conocimientos técnicos internos para poder supervisar eficazmente la evolución de las necesidades del sistema, las tecnologías y el uso de la red, a la vez que facilitan inversiones rentables.

El endurecimiento de la regulación de tensión y de los requisitos técnicos mínimos de conexiones a la red será esencial para garantizar que los recursos contribuyan adecuadamente al control de tensión y frecuencia, particularmente en el caso de la generación basada en inversores y el almacenamiento. Esto incluye la actualización de los códigos de red para reflejar las condiciones del sistema en situaciones de elevada generación de energía renovable y en previsión de la futura integración de grandes cargas variables. También será importante garantizar el cumplimiento de la normativa tanto por los activos existentes como por los nuevos. Las reformas regulatorias que se están llevando a cabo en España, destinadas a adaptar los requisitos técnicos a las necesidades de un sistema eléctrico cada vez más descarbonizado y basado en renovables, ya han supuesto importantes avances en este sentido.

Por último, el Gobierno debería seguir supervisando la implementación de la planificación de la red y el despliegue de inversiones específicas en tecnologías destinadas a reforzar la estabilidad de la red, como los compensadores síncronos y la electrónica de potencia avanzada, cuando los análisis del sistema detecten problemas de estabilidad a nivel local o regional. Un buen ejemplo es la modificación de la planificación actual que se está llevando a cabo para acelerar la implantación de este tipo de dispositivos. El despliegue estratégico de estos activos puede contribuir a mantener la inercia, la corriente de cortocircuito y la solidez del sistema a medida que se retira la generación síncrona convencional. Al mismo tiempo, las inversiones en medidas de resiliencia y estabilidad deben ir acompañadas de rigurosos análisis coste-beneficio para asegurar que sean proporcionadas, eficientes y específicas para los riesgos identificados. Unos marcos de evaluación transparentes pueden ayudar a gestionar los impactos en los consumidores de electricidad y en la industria, a la vez que salvaguardan la fiabilidad del sistema y la confianza pública.

AIE. CC BY 4.0.

Fuentes de la infografía:
Descarbonización del sector eléctrico: AIE (2026), World Energy Balances.
Reducción de emisiones: AIE (2026): Greenhouse Gas Emissions from Energy. Nota: Las emisiones procedentes de la generación de electricidad y calor se reasignan a los sectores de uso final en función de su consumo.
Tasas de electrificación: AIE (2026), World Energy Balances.
Almacenamiento: Análisis de la AIE basado en REE (2026), «Consulta el estado de las solicitudes» (consultado en junio de 2026).
Solar y eólica: AIE (2026), Renewable Energy Progress Tracker; Análisis de la AIE basado en la publicación de la Comisión Europea (2024), «España: PNIEC final actualizado 2021-2030» (presentado en 2024) (consultado en mayo de 2026).

AIE. CC BY 4.0.

International Energy Agency (IEA)

Spanish translation of *Spain 2026 Energy Policy Review (Executive summary)*

El presente documento fue publicado originalmente en inglés. Aunque la AIE no ha escatimado esfuerzos para asegurar que su traducción al español constituya un reflejo fiel del texto original, se pueden encontrar ligeras diferencias.

This work reflects the views of the IEA Secretariat but does not necessarily reflect those of the IEA's individual Member countries or of any particular funder or collaborator. The work does not constitute professional advice on any specific issue or situation. The IEA makes no representation or warranty, express or implied, in respect of the work's contents (including its completeness or accuracy) and shall not be responsible for any use of, or reliance on, the work.



Subject to the IEA's Notice for CC-licenced Content, this work is licenced under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licence.

Unless otherwise indicated, all material presented in figures and tables is derived from IEA data and analysis.

IEA Publications
International Energy Agency
Website: www.iea.org
Contact information: www.iea.org/contact

Typeset in France by IEA - November 2026
Cover design: IEA

España 2026

Revisión de la política energética

Las medidas gubernamentales desempeñan un papel fundamental para garantizar transiciones energéticas seguras y sostenibles. La política energética es clave no solo para el sector energético, sino también para alcanzar los objetivos medioambientales, económicos y sociales. Los gobiernos deben responder a las necesidades específicas de su país, adaptarse a los contextos regionales y contribuir a abordar los retos globales. Con el fin de ayudar a los gobiernos a desarrollar políticas energéticas y climáticas más eficaces, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) elabora revisiones de política energética.

Esta revisión de la política energética se ha llevado a cabo gracias a la colaboración entre el Gobierno de España y la AIE. Se basa en los amplios conocimientos de la AIE y en las aportaciones de especialistas de los países miembros de la Agencia para evaluar los retos más acuciantes del sector energético español y ofrecer recomendaciones sobre cómo abordarlos, con el respaldo de las mejores prácticas internacionales. El informe también destaca aquellos ámbitos en los que el liderazgo de España puede servir de ejemplo a la hora de promover transiciones energéticas seguras y limpias. Asimismo, fomenta el intercambio de mejores prácticas entre países para impulsar el aprendizaje, crear consenso y reforzar la voluntad política para lograr un futuro energético sostenible y asequible.